

CAPÍTULO V

Gaudeamus igitur

La reforma universitaria de Villar Palasí

Con el acceso a puestos ministeriales de miembros del Opus Dei, el franquismo cambió de aspecto. Las camisas azules y los saludos brazo en alto fueron sustituidos por ropajes y ademanes más propios de un país civilizado. En el terreno económico, Ullastres, Navarro Rubio, López Bravo, López Rodó y *tutti quanti* arrinconaron el modelo autárquico que había presidido la posguerra y, dentro de un orden, se inclinaron por una política de puertas abiertas mucho más liberal. En el campo de la educación, la evolución fue distinta. Los ministros del ramo solían ser catedráticos de universidad, pero de talante muy conservador y de acendrado catolicismo. Joaquín Ruiz Jiménez había sido quizá una excepción en la serie, porque, si bien reunía la segunda característica, tenía veleidades reformistas en el terreno político. Pero, en conjunto, pocos cambios habían introducido en el sistema educativo español en cualquiera de sus niveles. Fue José Luis Villar Palasí, miembro o en todo caso muy cercano al Opus Dei, catedrático de Derecho Administrativo, quien, al acceder al ministerio bien entrados los sesenta, emprendió una reforma a fondo del sistema educativo español, que cristalizó con la Ley General de Educación, aprobada en el año 1970. Era muy ambiciosa, aunque no sé si tan innovadora como pretendía, puesto que muchos aspectos, que

en otros países ya eran tradición, seguían sin aceptarse. La influencia de la Iglesia en temas tales como los colegios mixtos, por ejemplo, seguía incólume.

En el aspecto universitario, el nuevo ministro fue más lanzado. Su primera medida consistió en dividir en tres niveles, en lugar de los dos tradicionales, que eran la licenciatura y el doctorado, los títulos de la enseñanza superior. En su esquema, tras superar los tres primeros cursos de estudio en este escalón, se conseguía el título de diplomado. Con dos años más, bien aprovechados, se ascendía a licenciado y, finalmente, el último peldaño conducía al doctorado. A continuación incorporó a la universidad, como estudios que conducían al primer nivel de los tres citados, muchos de los que hasta entonces pertenecían a la formación profesional. Las escuelas de enfermería, que solían ser dependencias de los hospitales encargadas de atender a la formación del personal que precisaban; las escuelas normales o de magisterio; incluso las escuelas de comercio, de las que se ha hablado en capítulos anteriores, o las de ingeniería técnica pasaron a integrarse en la estructura universitaria como estudios que conducían a una diplomatura, titulación con la que se culminaba el primer ciclo. La universidad ensanchó considerablemente su base. Al mismo tiempo, se abría la posibilidad de crear colegios universitarios, o sea, centros en los que se impartía sólo el primer ciclo de las titulaciones. Podían ser simples extensiones de una universidad, en general geográficamente descentralizadas, o bien entidades independientes, privadas o públicas a ella adscritas. Era ésta la primera manifestación de la tendencia a adoptar rasgos del sistema universitario norteamericano, que con el tiempo adquiriría empuje, aunque siempre sin sobrepasar ciertos límites.

Pero a los efectos que ahora interesan fue especialmente relevante la decisión del nuevo ministro de crear tres universidades que habían de tener un carácter experimental. Era una medida revolucionaria en un doble sentido. Tras muchos años de parálisis se incrementaba el número de estas instituciones de naturaleza pública en el territorio español, que hasta entonces era de doce. Y lo hacía nada menos que en un 25 por ciento, una proporción, sin duda, importante. Y en se-

gundo lugar porque se las dotaba de un régimen especial, que permitía calificarlas de autónomas, distinto del centralizado corsé napoleónico que regía para las universidades tradicionales. Se trataba de un experimento cuyos resultados decidirían su eventual extensión a todo el entramado. Las dos primeras se localizaban en Madrid y Barcelona, pues el objetivo secundario, después del experimental, era descongestionar las más que masificadas universidades existentes en ambas capitales. La tercera nacía en Bilbao. Por razones difíciles de entender, hasta entonces en el País Vasco sólo existían dos centros públicos de enseñanza superior. El más antiguo era la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, nacida de las exigencias de las potentes empresas metalúrgicas situadas en su entorno. La segunda era la Facultad de Económicas creada pocos años antes, pero como una extensión en territorio vasco de la Universidad de Valladolid. Parecía lógico que el agravio histórico que para el País Vasco significaba su escasa consideración en el mapa universitario fuera corregido a la primera ocasión por un responsable ministerial mínimamente objetivo.

De todas maneras, bueno es señalar que la idea inicial del ministro era limitar la medida a dos nuevas universidades, una en Madrid y la otra en el País Vasco. Si añadió finalmente a la lista la de Barcelona, fue por la insistencia de su hermano Vicente, que le hizo ver que el olvido podría sentar muy mal en la capital catalana, desde donde ya entonces se acusaba al Estado de una discriminación negativa frente al trato preferente que recibía Madrid. Sin embargo, esta rectificación no fue completa. Explicaré por qué. Cuando llegó la necesidad de disponer de unos terrenos donde construir las instalaciones, en el caso madrileño, como es de rigor, el Estado puso los medios necesarios para su expropiación o adquisición, que no sé cuál de las dos vías fue la utilizada. Desconozco qué ocurrió con Bilbao. Pero sí sé que, en el caso de Barcelona, el compromiso del ministro con su hermano fue que la financiación de los terrenos que requiriera la nueva criatura iría a cargo de las entidades locales. Y así fue. No porque lo diga yo, aunque les aseguro que fui testigo del acto que seguidamente comentaré, sino porque lo demuestra un testimonio fehaciente. En la página 15 de *Una Historia Gráfica de la Universidad Autónoma de Bar-*

celona,¹⁹ publicada con motivo de su vigésimo quinto aniversario, aparece una fotografía en la que, según la explicación adjunta, se recoge el momento solemne de la firma de la compra de un terreno de 96 hectáreas en Cerdanyola para la construcción de la nueva universidad. Lo curioso es que quienes firman son los alcaldes de Barcelona y de Sabadell, los señores Porcioles y Burrull, respectivamente, cuya presencia en este acto formal a simple vista no se comprende. La razón es que el ministro ya había comunicado a su hermano que el Estado no financiaría los terrenos para la nueva universidad barcelonesa. Vicente consiguió que la compra corriera a cargo de los dos municipios citados, que a su vez recibieron un crédito de varias cajas de ahorro que aquéllos amortizaron religiosamente en los años subsiguientes.

La comisión promotora de la UAB

Sea como fuere, para la puesta en marcha de la nueva Universidad Autónoma de Barcelona se nombró una comisión promotora a cuyo frente se situó Vicente Villar Palasí, el hermano del ministro. Era catedrático de Bioquímica en la Facultad de Farmacia y al mismo tiempo primer teniente de alcalde en el consistorio barcelonés. De un entusiasmo contagioso, brillante, dinámico, liberal para los tiempos que corrían, supo pronto incorporar al proyecto a algunos profesores ilustres de la antigua universidad, abriendo, además, una ilusión entre muchos jóvenes desencantados de esta última que creían ver en la de nueva creación un afán renovador estimulante. Vicente Villar fue muy hábil. La Facultad de Medicina fue una de las primeras que se puso en marcha. Como figura ya reconocida convenció al doctor Piulachs, un cirujano de prestigio pero ya de edad respetable, para que ocupara el cargo nominal de decano, con lo que pasaba a formar parte de la comisión promotora, pero al mismo tiempo daba la batuta organizadora a dos entonces jóvenes médicos, muy críticos con la figura tra-

dicional del todopoderoso catedrático y políticamente «progres», como los doctores Soler Durall y Oriol Bosch. Con la Facultad de Letras repitió la fórmula. Federico Udina Martorell, catedrático numerario, ocupó el decanato, pero a su lado estaba Francesc Noy, Paco Noy era como todos lo conocían, uno de los PNN sancionados por el implacable García Valdecasas. Cuando llegó el momento de poner en marcha la Facultad de Económicas, Villar Palasí pensó en Joan Sardà, que bastantes años atrás, tras unas experiencias desafortunadas, después de pasar por la Universidad de Santiago y muy fugazmente por la de Murcia, había lanzado la toalla ante el escaso atractivo intelectual y el fuerte olor a naftalina de los claustros a los que había pertenecido. Bajo la capa de escepticismo con que se disfrazaba, Sardà guardaba insatisfecha su vocación universitaria. No tenía buena salud ni fuerzas para grandes aventuras. Pero propuso mi nombre como acompañante suyo en la nueva singladura, para lo que precisaba que ambos fuéramos nombrados vocales de la comisión promotora, recibiendo la aceptación de Vicente Villar y la posterior del ministro, su hermano.

Como ya he explicado, yo tenía la toalla en la mano, a punto de arrojarla por los muchos palos que me había propinado mi intentona universitaria. Pero el cambio de decorado, y sobre todo de personajes, que ahora se me ofrecía me hizo reconsiderar la decisión. Mi sorpresa fue que en la primera sesión de la comisión promotora a la que asistí, su presidente, Vicente Villar Palasí, a quien apenas conocía, me nombró secretario general de la misma, y en consecuencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo era un profesor no numerario y, por lo tanto, un don nadie para los estándares prevalentes; supongo que, con la designación, Villar buscaba también dar una señal de ruptura con la tradición. El peso de las nuevas tareas que sobre mis espaldas recayeron se incrementó con el encargo que Villar nos hizo a Paco Noy y a mí de redactar el proyecto de estatutos de la nueva universidad. Al no ser ninguno de los dos jurista, nos indicó que, para lo que precisáramos, podíamos contar con el asesoramiento de un funcionario municipal, excelente persona, Palomar se llamaba, en quien tenía plena confianza.

19. Consell Social de la UAB, *UAB 25 anys: una història gràfica*, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1995.

Paco Noy era un especialista en francés medieval. El sabio Martí de Riquer tenía hacia él mucha consideración. Era pintoresco. Miopía, con una cabellera rizada, era una mezcla de erudito distraído, gastrónomo empedernido y pragmático convencido. Amigo de Néstor Luján y su pandilla, era capaz de ponerse a cocinar un manjar exquisito a la vez que recitar algunos extractos de Rabelais para inmediatamente discutir los últimos fichajes del Barça, aunque dudo que su mala vista le permitiera apreciar sus rendimientos en el campo. Anárquico en sus horarios, daba un aire de frescura a todas sus intervenciones. Vicente Villar confió mucho en él. Fue su mano derecha, razón que lo llevó a nombrarle director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAB, si bien era dudoso que tuviera los títulos administrativos, que no las capacidades reales, exigidos para ejercerlo. Trabajar con él tenía un aspecto positivo, su enorme imaginación no exenta de pragmatismo, y el negativo de su anarquía. Llegué a anudar muy buenos lazos con él. En nuestro empeño de redactar unos estatutos mantuvimos muchas reuniones, algunas de ellas en el pabellón modernista del hospital de la Santa Creu i Sant Pau donde estaba instalada la Facultad de Medicina en pleno verano, cuando el calor más atosigaba. Y un buen día, cuando nuestro rector comisario había de reunirse en Madrid con el ministro, su hermano, le entregamos un ejemplar, con muchas páginas y artículos, del proyecto, o quizá anteproyecto, pues nunca he sabido entender la diferencia entre ambas etapas, de unos estatutos que pretendían, así éramos de creídos, instaurar un modelo que solucionaba todos los problemas que aquejaban a la universidad no sólo española, sino, si me apuran, a la mundial. Ingenuidad que se rompió cuando la Contrarreforma, que ya sabemos que por nuestras latitudes es siempre potente, acusó a un Paco Noy, desprotegido de sus mentores, de ocupar un cargo reservado a quienes hubieran pasado victoriosamente por las horcas caudinas de una oposición. Siempre fue mirado con recelo por sus colegas de universidades más tradicionales, para quienes era inconcebible que un no numerario ocupara un cargo según ellos tan destacado que sólo podía caer en manos de la supuesta élite. La inquina creció al comprobar la estrecha amistad que mantenía y la fuerte influencia que

ejercía sobre Ricardo Díaz Hochleitner, subsecretario del ministerio y cerebro de la reforma educativa. Cuando Vicente Villar Palasí, su amigo y protector, fue apartado del rectorado, tenía los días contados, por lo que tuvo que buscar nuevo acomodo. Su versatilidad era tan grande que no tardó mucho en ser nombrado director de *La Vanguardia*.

El hecho es que nuestro anteproyecto fue a Madrid, volvió con muchas observaciones a Barcelona y, tras unas cuantas iteraciones entre estas dos ciudades, fue finalmente aprobado. Nuestro texto sufrió muchos recortes, tanto en la extensión como en el grado de autonomía que pretendía. Una vez sancionado y publicado en el BOE el texto final, se disolvió la comisión promotora y hubo que proceder a nombrar los órganos de gobierno, tanto individuales como colectivos, de la universidad. Había un consenso claro en torno a la figura de Vicente Villar. El profesorado se sentía en general muy animado y confiaba en tener el camino expedito hacia una institución mucho más participativa y democrática que aquellas en las que se había formado y de las que algunos de sus miembros habían sido expulsados. Había, sin embargo, un grupo de estudiantes, y quizá algún que otro profesor más en la sombra, muy críticos. Unos lo eran porque tenían lo que podría denominarse el síndrome *del puente sobre el río Kwai*. Todo lo que fuera cualquier mejora institucional parecía dar apoyo al franquismo y, sobre todo, al tibio espíritu reformista de su postrera etapa. En consecuencia, cuanto más éxito tuviera la iniciativa, más necesario era abortarla. Otros, más ácratas, porque todo lo que no se hubiera generado en reuniones asamblearias donde estudiantes y obreros tuvieran la última palabra era hacer el caldo gordo al capitalismo. El hecho es que la sesión de aprobación de los nuevos estatutos y de elección del primer rector se celebró en la sala de actos del hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Como secretario me correspondió sentarme en la mesa presidencial y desde la tribuna gocé de una perspectiva privilegiada sobre el desarrollo del acto. Se celebró un sorteo para ver quién había de presidirlo, y resultó agraciado, si se puede decir así, el doctor Puigvert, famoso urólogo que tenía a Franco entre sus pacientes. Subió al estrado revestido de la bata blanca de asombrosa elegancia.

cia con la que atendía en su consulta y con la suficiencia de quien se siente *au-dessus de la mêlée*. A media sesión, después de aporrear violentamente la cerrada puerta del salón, ésta se abrió por orden de Puigvert, y un numeroso grupo de soliviantados estudiantes irrumpió con pancartas y gritos de protesta. La altanería con la que el urólogo les comunicó que les daba tres minutos para expresar sus opiniones los dejó desconcertados. Leyeron atropelladamente un manifiesto y se fueron sin mayores alborotos. Comprobé, en esta ocasión, que las únicas *vedettes* que aún impresionan a la gente son las estrellas cinematográficas, los futbolistas de élite y los cirujanos de renombre. Pueden decir lo que quieran sin que nadie se atreva a rechistar.

Los años de consolidación

Seguí de secretario, ahora de la junta de gobierno que según sus flamantes estatutos debían regirla. Yo tenía un grave inconveniente para el desempeño de este cargo. Si alguna característica me distingue, es la de ser desordenado. Cualquier papel que, precisando ser guardado, caiga en mis manos más pronto o más tarde se extraviará. Tanto es así que, escaldado por la experiencia, años más tarde adopté la costumbre de avisar a mis secretarías para que nunca me entregaran un documento original, porque si éste se perdía, yo declinaría toda responsabilidad y las señalaría como únicas culpables. Yo sólo puedo ser depositario de fotocopias cuyos originales han de estar a buen recaudo y, aun así, éstos no han de ser comprometidos. Pero era aún muy inexperto, y en las sesiones de las que había de levantar acta anotaba en un trozo de papel los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. El trozo de papel iba a mi bolsillo con la confianza de disponer de él en el momento de redactar el acta que habría de leer en la próxima sesión. Siempre esperaba hasta el último momento para hacerlo y entonces, por mucho que rebuscara en los bolsillos de mis diversas americanas, el borrador no aparecía, seguramente abandonado en alguna papelería. No me quedaba más remedio que echar mano de mi flaca memoria e intentar recordar lo tratado. Me temo que más de una vez

las actas leídas, y aprobadas, no debieron de ser del todo fidedignas. Pero, en cambio, Martí de Riquer, el gran cervantista, que durante un tiempo, convencido por Paco Noy, ocupó el vicerrectorado de la universidad, solía elogiar lo bien redactadas que estaban, para satisfacción de mi ego. Remedando a Groucho Marx, desde aquella experiencia adopté la resolución de no aceptar ser miembro de una entidad que me aceptara como secretario.

Y sin embargo, se tomaron acuerdos importantes. Entre ellos destaca el de la construcción de sus instalaciones en lo que sería después el campus de Bellaterra. En los momentos iniciales, las facultades se habían ubicado en locales dispersos y en general poco adecuados. La Facultad de Medicina era quizá la más privilegiada, pues se había emplazado en uno de los pabellones modernistas del hospital de Sant Pau. La de Letras estaba en una ala del monasterio de Sant Cugat, para gran indignación del párroco, que veía cómo unos estudiantes de pelambreras y comportamientos poco convencionales se adueñaban de sus claustros y jardines. La Facultad de Ciencias luchaba por hacerse espacio en la torturada arquitectura de la denominada Casa de Convalecencia del hospital de Sant Pau, y, finalmente, la Facultad de Económicas, como ya explicaré, había ocupado *manu militari* un edificio que había sido proyectado para la Escuela de Idiomas Modernos, en los alrededores del barrio chino barcelonés de mala fama. El problema radicaba no sólo en la inadecuación y estrechez de los locales, sino también en su dispersión geográfica. La guinda del pastel era el rectorado, que fue dando tumbos desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta la propia Casa de Convalecencia, en un quier y no puedo en pos de unas instalaciones dignas. Desconozco el proceso que llevó a Vicente Villar a adquirir a la duquesa de la Victoria, esposa del entonces capitán general de Cataluña, una finca de 96 hectáreas, sita en el municipio de Cerdanyola, pero contigua a la urbanización cuyos promotores le habían puesto el comercialmente sugestivo nombre de Bellaterra. Dos interrogantes planean sobre la operación. ¿Se buscó un terreno alejado de cualquier núcleo urbano para evitar el entonces frecuente espectáculo público de unos policías, los conocidos como grises, armados de porras, persiguiendo

a los estudiantes por las calles? El que se siguiera un criterio idéntico en Madrid para su nueva universidad podría llevar a una respuesta afirmativa. Pero también tiene sentido el argumento de que en la ciudad era imposible encontrar unos terrenos libres de suficiente extensión para edificar un campus al estilo americano. La segunda cuestión, naturalmente, nace de la personalidad de la vendedora. También en este caso cabe hacer lucubraciones.

Cerdanyola era y aún es una villa industrial habitada por clase trabajadora. Bellaterra es una urbanización situada en uno de los extremos del municipio en la que mora gente acomodada, en torres unifamiliares de relativo lujo. Tradicionalmente, sus vecinos alegan agravios comparativos. En su opinión, a pesar de ser unos contribuyentes importantes a las arcas municipales, los servicios que el consistorio les presta dejan mucho que desear. Afirman que aportan más y reciben mucho menos que quienes habitan en el casco de la población. En consecuencia, repetidas veces han iniciado procesos secesionistas, que las autoridades competentes no han dejado de truncar. Al situarse la universidad cerca de esta urbanización y ser su estación de ferrocarril el punto de acceso de muchos estudiantes, se extendió la costumbre de designarla como la Universidad de Bellaterra, ignorándose el topónimo Cerdanyola. Este olvido ha sido causa de repetidas quejas por parte de los munícipes de la localidad vallesana, manifestadas en los actos oficiales, como las inauguraciones de curso, en las que por su cargo intervenían en los parlamentos de rigor.

Adquirida la finca, pagada como se ha dicho por los ayuntamientos de Barcelona y Sabadell gracias a unos créditos concedidos por varias cajas de ahorro, se inició un lento proceso de compra y/o expropiación de otras propiedades contiguas. Seguidamente se abrió un concurso de proyectos arquitectónicos, dándose un plazo breve, vista la complejidad técnica de las instalaciones, para la presentación de las propuestas. La consecuencia es que, dada la premura de tiempo, todos los anteproyectos que se presentaron estaban poco definidos. Resultó vencedora la propuesta de Subías, Giráldez y López Iñigo, tanto por su calidad como por el hecho de ser barceloneses y, además, de haber demostrado su *savoir-faire* en los edificios de las fa-

cultades de Derecho y de Ciencias Económicas, los dos de mejor estética del conjunto que la Universidad de Barcelona tenía y tiene en la avenida Diagonal.

La cuestión es que los tres arquitectos premiados confiaban en que a lo largo de su ejecución podrían ir perfilando todos aquellos extremos de la obra que, al haber actuado contrarreloj, no se contemplaban en lo que a duras penas era un anteproyecto. Pero su gozo se fue al pozo. El ministerio contaba con un cuerpo de arquitectos funcionarios cuya retribución consistía en un sueldo fijo más una proporción de los honorarios que, según las tarifas vigentes, hubieran percibido unos facultativos independientes de haber dirigido la obra. Corporativamente reclamaron que se les encargara la dirección de la obra. Aunque Vicente Villar intentó oponerse a sus exigencias, su hermano el ministro claudicó. Como se insistía en la urgencia de la obra, el plazo de ejecución que debían cumplir las empresas constructoras fue muy breve. Por otro lado, los directores técnicos de la obra estaban en Madrid y muy raras veces se desplazaron a comprobar in situ el cumplimiento de las condiciones de calidad. Entre las prisas y la escasa atención que los facultativos ministeriales pusieron tanto en la definición de los vacíos que el proyecto tenía como en la comprobación del cumplimiento de los requisitos que sí contemplaba, la calidad del producto final dejó mucho que desear. Durante mucho tiempo, Subías, Giráldez y López Iñigo se negaron a reconocer la paternidad de lo que en los aledaños de Bellaterra se había erigido.

Supongo que a las constructoras la gran libertad de que gozaron debió de sentarles como anillo al dedo. Poco tiempo después de ser inaugurada, se hundió el techo de la biblioteca, situada inicialmente en lo que hoy es el edificio del rectorado. Afortunadamente, el suceso ocurrió durante la noche, cuando el local estaba desierto. Los únicos daños que se produjeron fueron materiales y, además, de escasa cuantía. Sólo resultaron afectados unos cuantos libros. Vicente Villar estaba en Madrid, y Martí de Riquer ejercía de rector en funciones. Me mandó llamar para que junto con el notario de Cerdanyola levantáramos acta del incidente. Por cierto, el notario de Cerdanyola se resistió mucho a acudir a la llamada. Estaba muy enfadado por cuan-

to nadie se había acordado de él para actos sustanciosos, sustanciosos en cuanto a los aranceles percibidos por el fedatario público, como la compraventa de los terrenos, y en cambio se le reclamaba para actuaciones de poca enjundia monetaria. Villar pretendió exigir responsabilidades civiles, y si se terciara, penales, a los directores y las empresas constructoras. Éstas acudieron inmediatamente para expresar su voluntad de reparar inmediatamente el techo, y con un talón bancario en el que sólo faltaba añadir la cifra de la indemnización por los daños causados. Sin rechistar aceptaron el importe que Villar indicó, que era a todas luces exagerado. Así se enterró la petición de responsabilidades. Es evidente que las empresas constructoras no tenían la conciencia muy tranquila y estaban dispuestas a cualquier sacrificio con tal de no remover el fango que había en el fondo de las aguas.

Por entonces, la Policía Armada Nacional, los grises para entendernos, sólo se encargaba del orden público en las ciudades que excedían de cien mil habitantes. En las de menor población, esta tarea recaía sobre la Benemérita Guardia Civil. La distinción era importante. Los grises ya estaban acostumbrados a lidiar con los estudiantes. Salvo casos muy extraordinarios se limitaban a enfrentar unos efectivos de unas cuantas decenas de agentes a las manifestaciones multitudinarias de estudiantes, protegiéndose con unos escudos de los proyectiles, en su mayoría piedras y cascotes, que éstos les lanzaban, para posteriormente perseguirlos porra en mano por las calles adyacentes. La Guardia Civil, en cambio, actúa en parejas. Pero es que, además, su reglamento más o menos dice que en caso de encontrarse frente a una partida de personas de aspecto amenazador deben darles el alto y conminar a sus integrantes a disolverse. De no acatar esta orden, deben dar un segundo aviso. Si también a éste le hacen oídos sordos, su obligación es poner rodilla en tierra y hacer fuego a discreción. En Sant Cugat, donde inicialmente estaba ubicada la Facultad de Letras, ya habíamos tenido un problema que hubiera podido desembocar en tragedia. Suerte que José Manuel Blecua, el hoy docto miembro de la Academia que fija, limpia y da esplendor, y Gabriel Ferrater, el poeta que cumplió su promesa de suicidarse el día que cumpliera los cincuenta años, mostraron una extraordinaria mano izquierda. Hace

poco, en un acto público, José Manuel Blecua rememoraba el incidente y explicaba cómo lo que había podido ser una tragedia desembocaba en una comedia, cuyo acto final tuvo lugar en el mesón situado en la plaza del Monasterio, con los tres protagonistas, Blecua, Ferrater y el sargento de la Guardia Civil tomando copas. Tampoco Cerdanyola sobrepasaba, ni de lejos, los cien mil habitantes. Cuando ya se habían trasladado al nuevo campus todas las facultades, los estudiantes anunciaron una gran manifestación de protesta por alguno de los desmanes que el Gobierno solía cometer. Se anunciaba un conflicto, pues los efectivos de la Guardia Civil en aquel municipio eran escasos y podían responder violentamente, en definitiva tal como les ordena el reglamento, a los manifestantes. Después de discutir el tema en junta de gobierno, Villar Palasí se fue a ver al gobernador civil, que me parece que era Tomás Pelayo Ros, y lo convenció para que aquel día se hiciera una excepción a la normativa vigente y enviara a la Policía Armada a vigilar el campus de Bellaterra. Así se hizo y no ocurrió nada extraordinario.

A pesar de que el tiempo oxida los entusiasmos, la Autónoma de Barcelona seguía con su afán innovador. Cierto que el traslado a la nueva ubicación y el aumento en la dimensión creaban problemas, pero el clima que prevalecía entre el profesorado era una mezcla de voluntad de poner los fundamentos de un nuevo orden universitario más acorde con las exigencias de la sociedad de finales del siglo XX y de resistencia al régimen político que después de muchos años ya daba muestras de agotamiento. Pero los últimos estertores de una agonía suelen ser violentos. En 1972, Carrero Blanco, el almirante en quien Franco había delegado buena parte de su poder, creyó que los disturbios que proliferaban en las universidades españolas eran consecuencia directa de la mano blanda con la que había actuado el ministro Villar Palasí. Ni corto ni perezoso lo sustituyó por el inefable Julio Rodríguez, un catedrático de Geología de su confianza, pero personaje de sainete, a quien encomendó actuar con mano dura en el restablecimiento del orden. Los despropósitos que llegó a cometer tan estrafalario individuo fueron innumerables. El más conocido fue sustituir el tradicional año académico, que va de octubre a octubre, por el denominado juliano,

de enero a enero. Con esta medida creó numerosos desajustes y una de las pocas cosas que consiguió fue que un curso durara sólo seis meses, pues el experimento no superó este plazo de tiempo.

Eliminado José Luis Villar, *l'ennemi à battre* del nuevo ministro era su hermano Vicente. La Autónoma de Barcelona se había convertido en el portaestandarte de la resistencia al peculiar concepto de universidad de Carrero Blanco. Su rector, a quien el cargo le gustaba, a pesar de no tener ya la protección de su hermano, resistió todas las embestidas que vinieron de Madrid. Pero, finalmente, un motivo más o menos anecdótico dio la excusa a Julio Rodríguez para dar el hachazo definitivo. En 1973 suspendió los Estatutos de Autonomía de la UAB y abrió una crisis considerable. Se reunió con urgencia la junta de gobierno en una sesión que duró un par de días. Esta vez sí que tuve que poner mis cinco sentidos en la redacción del acta pues las discusiones tuvieron mucha enjundia. Prácticamente, todos los miembros queríamos dimitir ante tamaño atropello. El único que se resistía era Vicente Villar, para quien la Autónoma era la niña de sus ojos. Supongo que tenía la esperanza de que la medida de suspensión tuviera corta vida. Intentó por todos los medios convencernos de que, impertérritos, siguiéramos en nuestros respectivos cargos. Fue en vano. Todos nos mantuvimos en la decisión inicial. Reconozco que pasé momentos desagradables, pues yo le tenía afecto y le debía varios favores, entre ellos haberme recuperado para las tareas universitarias, pero tenía muy claro que no podía ceder. Finalmente no le quedó más remedio que claudicar y presentar también su dimisión. Verse apartado del cargo le causó un gran disgusto. No sé si su mal tuvo un origen somático, pero el hecho cierto es que poco tiempo después moría fulminado por un cáncer de páncreas.

La puesta en marcha de la Facultad de Económicas

Con el realismo que lo caracterizaba, Sardà mantuvo, desde su nombramiento como decano de la nueva facultad, al año de haberse creado la Autónoma, que aquélla, para tener una etapa de rodaje, debía

iniciar sus actividades por los cursos de doctorado. En su opinión, era la manera de reclutar profesorado y disponer de un margen de preparación para hacer frente al auténtico reto masivo, que era la licenciatura. Villar Palasí, hombre de acción más que de reflexión, aceptó la propuesta a regañadientes. Él hubiera querido un inicio inmediato y, además, con el máximo número posible de estudiantes. Había un primer inconveniente para cualquiera de las dos soluciones. No disponíamos de local alguno donde cobijarnos, aunque fuera con estrecheces. La primera tarea era resolver esta carencia. Villar, como era concejal, pensó en algunos de los inmensos edificios construidos con motivo de la Exposición Universal de 1929 en la ladera de Montjuïc y que permanecían vacíos, aunque también destartalados. Fuimos a ver uno de ellos, inmenso; apreciamos que su aprovechamiento hubiera exigido su derribo para luego sobre el solar construir uno nuevo. La solución era muy costosa pero, lo que aún era peor, exigía mucho tiempo. Mucho más del que disponíamos. Había que buscar otra vía. Sardà recordó que después de nuestra guerra civil se había creado una fundación, o persona jurídica similar, que a su vez había adquirido un edificio en la parte alta de la ciudad, que, por lo que conocía, debía de estar prácticamente inutilizado. Empezamos a indagar, con tal de precisar sus coordenadas, y finalmente lo localizamos. Se trataba de una torre, en la terminología catalana, o chالé, en la madrileña, de aceptable estética pero escasa funcionalidad, con la ventaja de estar en una calle muy tranquila, la calle Pomaret, por encima del paseo de la Bonanova, pero con el inconveniente de lindar con la vía del suburbano por la que pasan numerosos trenes. Sus dimensiones dejaban bien a las claras que no podía albergar una facultad, pero sí algún tipo de estudios minoritarios como podían ser los de doctorado. Pero incluso para esta finalidad había que efectuar una remodelación a fondo, con la correspondiente exigencia de tiempo y recursos financieros. No obstante, la visita no fue en balde. A los tres se nos quedó grabado en la mente aquel edificio infrautilizado pero con posibilidades de ser aprovechado como sede de alguna actividad universitaria minoritaria en la ciudad. He dicho infrautilizado porque de sus múltiples salas sólo una era utilizada

como despacho por un investigador, ya mayor, que se dedicaba a confeccionar una revista de irregular periodicidad y nula difusión sobre temas económicos. En una sala cerrada nos encontramos con dos sorpresas. Por un lado, un montón de ejemplares de distintos libros publicados en los años cuarenta y cincuenta por el Instituto de Estudios Mediterráneos, que tal era el nombre de la fundación propietaria del inmueble. Algunos de ellos tenían escaso interés; otros, en cambio, eran muy buscados por los estudiosos, que los creían agotados. Nadie se había ocupado de hacerlos llegar a las librerías donde aún eran demandados. Entre ellos recuerdo alguna obra de Martí de Riquer. La noticia de que aún existían ejemplares de su edición lo llenó de alegría. Pero, además, en un rincón nos encontramos con unos volúmenes, primorosamente encuadernados, donde aparecían las firmas de los catalanes que, en el año 1940, se adhirieron a un masivo homenaje de agradecimiento al general Franco por haberles librado del yugo comunista y de todos los otros supuestos males que supo conjurar. Las firmas aparecían clasificadas municipio por municipio por debajo del respectivo nombre, escrito en letra perfectamente legible. Mucho jugo debía de poder extraerse de tales volúmenes, pues al cabo de poco tiempo unas manos desconocidas pero interesadas los hicieron desaparecer.

La visita despertó nuestro interés por poder disponer del edificio. Veíamos en él un posible *ped à terre* en la ciudad de una universidad localizada en el extrarradio. Empezamos a escarbar en registros y centros oficiales en busca de los entonces responsables actuales del Instituto de Estudios Mediterráneos. Resultó que su presidente era el mismo que aparecía en la escritura de constitución de la fundación: don Ramón Serrano Suñer, personaje bien conocido por dos razones. La primera era ser concuñado de Francisco Franco por su matrimonio con la hermana de la esposa del dictador. La segunda, y más importante, por el relevante papel que había desempeñado como ministro, primero, de Gobernación o Interior y, luego, de Asuntos Exteriores en los gobiernos de los años de la posguerra. Quienes tenemos suficiente cronología recordamos sus fotos con la reglamentaria camisa azul saludándose con Hitler y los gerifaltes nazis, no sé si en Berchtesga-

den u otra localidad austríaca o alemana. Más culto e inteligente que su cuñado, había sido considerado la eminencia gris del Régimen hasta que motivos que aún hoy en día no resultan del todo claros los separaron. Desde la ruptura se había sumido en un anonimato que sólo años más tarde se truncó con la publicación de sus memorias. Como queríamos explorar la posibilidad de algún tipo de cesión de uso del infrautilizado edificio, junto con Vicente Villar le hicimos una visita en su domicilio de la calle Serrano de Madrid. Ya tenía muchos años, pero conservaba un porte muy elegante, tanto que parecía un auténtico *gentleman* inglés, con su traje de franela, sus cabellos y bigote blancos bien recortados. Tras incurrir en lo que después descubrí que era su vicio, despotricar de su cuñado, pero, sobre todo, de Carrero Blanco, a quien calificaba de *cerril*, eludió darnos una respuesta concreta a nuestra petición con el argumento de que una decisión de este calibre requería la aprobación del patronato de la fundación. Y el asunto entró en hibernación, pero, como comprobarán unas páginas más adelante, la semilla puesta con la visita germinó y algunos años más tarde permitió una buena cosecha.

El edificio de Pomaret no era tampoco la solución. Estábamos ante un callejón aparentemente sin salida. Impensadamente alguien recordó que el inmueble que se había construido para la Escuela de Idiomas Modernos, en la avenida García Morato, según la pronunciación oficial, o Morató como probablemente debería ser correcto atendiendo al origen catalán del aviador de este nombre, estaba sin inaugurar, por no contar con el correspondiente presupuesto de funcionamiento. Su director era don Luis Pérez Pardo, un catedrático de Geografía Económica de la Escuela de Comercio. Hombre afable, distinguido, estaba relativamente amargado, pues sus ilusiones de ascender al grado más elevado de catedrático de universidad, como algunos de sus colegas, habían fracasado. Dominaba perfectamente el inglés, razón por la cual, supongo, había sido designado director de lo que aún era un proyecto de escuela. No le hizo mucha gracia nuestra pretensión de ocupar provisionalmente el flamante edificio, pero comprendió que toda resistencia sería inútil, habida cuenta de la relación familiar de nuestro rector con el ministro.

Así irrumpimos en un edificio situado al borde del Raval o barrio chino barcelonés. Era nuevo de trinca y estaba totalmente amueblado, de tal manera que podía ser inmediatamente utilizado. Sardà, empero, siguió con su idea de esperar un año la apertura de la matrícula del primer curso de la licenciatura para disponer de un período de rodaje con unos cursos de doctorado. Eran muchos los profesores que se habían acercado a la nueva facultad. El prestigio de su decano hacía de pararrayos. Trías Fargas, Jordi Nadal, Joaquim Muns y algunos otros se encargaron de sendos cursos, mientras íbamos perfilando el plan de estudios y el profesorado de la licenciatura que seguidamente debía ponerse en marcha. Siempre prudente, Sardà quería como máximo aceptar cien estudiantes. Villar Palasí, en cambio, vista la capacidad del edificio, pretendía incrementar notablemente este techo. Quería estar al frente de una universidad con un fuerte contingente de alumnos. Finalmente acabó imponiéndose la tesis del decano. El centenar de estudiantes admitidos aquel curso 1970-1971 tuvo como profesores a Josep M.^a Bricall en Economía, Jordi Nadal en Historia Económica, Ángel Latorre en Introducción al Derecho, Ramón Companys en Análisis Matemático y, finalmente, Joaquim Muns se encargó de una asignatura que, tal como ya he señalado anteriormente, tenía como misión comentar las noticias de índole económica que estuvieran en cada momento de actualidad. Profesores de primerísima calidad y gran dedicación y un número reducido de estudiantes selectos eran dos condiciones que permitieron obtener unos magníficos resultados.

En aquel edificio estuvimos tres cursos académicos, que transcurrieron sin problemas internos pero con sobresaltos derivados de la tensa situación política por la que atravesaba el país. Uno de ellos fue particularmente delicado. En el segundo piso del inmueble había un pequeño bar. El reducido número de estudiantes permitía que todos se conocieran mutuamente. De ahí que rápidamente identificaran como miembros de la policía secreta a dos desconocidos que se pasaban el día en el bar jugando a los dados. Podríamos decir que eran unos agentes de una policía a todas luces secreta. Un día, los nervios de los estudiantes se dispararon por algún acontecimiento político y empe-

zaron a proferir gritos contra los agentes en cuestión llegando a acorrarlos para expulsarlos de la facultad. Quizá por falta de experiencia uno de ellos se asustó ante la actitud de los estudiantes y esgrimió su pistola, tras sacarla de la sobaquera o del lugar donde la llevara. Hubo un momento de expectación. Los estudiantes, atemorizados, se retiraron, y los policías salieron incólumes. Yo creo que nunca más volvimos a tener visitantes de este cuerpo, cuando menos mientras estuvimos alojados en la avenida García Morató.

La facultad se ponía en marcha, pero yo tenía mi problema por resolver. Por muy secretario general que fuera seguía siendo un profesor no numerario. Cierto es que en nuestros estatutos se contemplaba la posibilidad de extender contratos indefinidos, de tipo laboral, equiparables en cuanto a sueldo al de catedrático. Pero siempre existía el riesgo de una posible rescisión, aunque quizá con una indemnización pecuniaria. Por otro lado, los derechos de los profesores contratados eran más limitados que los de los numerarios. Así, por ejemplo, no podían acceder a cargos de la máxima responsabilidad, como el de rector. Vicente Villar y Paco Noy me ofrecían un contrato vitalicio, pero Sardà, gato escaldado por viejo, me aconsejaba que hiciera lo posible para que accediera por oposición a la condición de numerario. Mis probabilidades seguían siendo reducidas. Los tres miembros que serían designados por sorteo pertenecían al clan Fernández Pirla, o en todo caso le eran sumisos. Pero yo sabía que nunca tendría un momento tan favorable. Vicente Villar Palasí influyó sobre su hermano para que designara a Joan Sardà presidente del tribunal. Y luego, en un juego de manos que a todas luces vulneraba la normativa, hizo que el quinto miembro de libre designación fuera Jordi Nadal. Era una medida que vulneraba la normativa por cuanto ésta exigía que esta libre designación recayera sobre un catedrático de una asignatura afín a la que era objeto de la oposición, y era evidente que esta condición no se daba entre la Historia Económica y la Economía de la Empresa. Pero corrimos el riesgo, y en el *Boletín Oficial del Estado* apareció un tribunal que era impugnable. Supongo que quienes tanta inquina me tenían debieron apercibirse de este hecho. Por qué no lo impugnaron es cuestión debatible. Se me ocurren dos explicaciones. La primera es que nin-

guno de ellos quisiera dar la cara y firmar el correspondiente recurso. Y uno por otro la casa sin barrer. La segunda, más verosímil, es que creyeran que, como con seguridad dispondrían de tres miembros afines en el tribunal, ya recibiría mi merecido en la votación. El hecho es que se equivocaron, aunque no de mucho. Éramos dos los candidatos y, a priori, yo contaba con dos votos y mi contrincante con tres. Pero una hábil labor de zapa de Sardà y Nadal trajo como fruto que uno de los tres que habían de sacrificarme al final de los seis ejercicios cambiara de opinión y fuera yo quien consiguiera la mayoría mínima necesaria para acceder a la plaza convocada. Espero que ya haya prescrito la posible anulación de mi nombramiento por el vicio de forma en la composición del tribunal. Sé que, en alguna ocasión, he sido acusado de ser catedrático de Economía de la Empresa con un solo voto de los tres miembros de la especialidad que habían de juzgarme. La respuesta que les daría, y aprovecho la ocasión de hacerlo en estas líneas, es que si algún motivo de orgullo tengo en mi historial es haber sido aupado a catedrático por dos personas de la calidad intelectual y universitaria de Joan Sardà Dexeus y Jordi Nadal Oller. Pocos pueden lucir tamaña distinción.

Teníamos otra asignatura pendiente. Bricall se había convertido en una pieza esencial de la facultad. Él y su equipo se habían hecho cargo de las enseñanzas en torno a la Teoría Económica con unos resultados memorables. Ciertamente no seguía la ortodoxia que desde Von Stackelberg se había impuesto en la universidad española cuyo testigo había recogido Castañeda, pero se había convertido en un elemento indispensable para el buen fin del proyecto que llevábamos entre manos. Para los estudiantes era un auténtico maestro, una figura que no merecía duda alguna. En consecuencia, había que consolidarlo y, para ello, no había más remedio que hacerlo numerario. Nuevamente, Sardà se movilizó. Gracias a los Villar Palasí conseguimos que en su tribunal participaran el propio Sardà y José Luis Sureda, amigo de todos nosotros y, sobre todo, patrocinador de Bricall. Los otros tres miembros fueron designados por sorteo, como era preceptivo. El bombo designó al propio Castañeda y a otros dos catedráticos cuyos nombres no voy a mencionar, pero que sabían de primera

mano, por estar o haber estado destinados en Barcelona, la capacidad intelectual, la honestidad y la dedicación a la universidad del que era único candidato a la plaza convocada. Confiábamos totalmente en el resultado de la oposición. Mi sorpresa, que derivó en un inmenso disgusto, fue la llamada telefónica que Sardà me hizo desde Madrid para comunicarme que Bricall no había pasado del primer ejercicio por cuanto los tres designados por el «imparcial» sorteo habían considerado que no tenía los méritos precisos ni para pretender exponer ante ellos, sabios en Teoría Económica porque así en su día lo había dicho el Boletín Oficial del Estado, sus conocimientos de la materia. El resultado provocó una crisis en la facultad. Bricall volvió a refugiarse junto a José-Luis Sureda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, dejándonos con la difícil papeleta de encontrarle un sustituto. A veces, no siempre, los hechos acaban dando la razón. Tras superar muchos otros obstáculos, Bricall ha acabado convirtiéndose en una figura reconocida en el mundo universitario europeo, mientras que algunos de los que le lanzaron los torpedos en aquella oposición pueden haber tenido cierto predicamento, aunque a veces muy efímero, en el mundo político, más sólido en el profesional, pero no se han distinguido por su carrera universitaria.

El traslado de la facultad a Bellaterra tuvo considerables efectos. El primero significó un cambio en el decanato. Sardà, cuya salud no era extraordinaria, no se vio con ánimos para subir diariamente hasta la nueva ubicación y dejó el cargo, que fue ocupado por Jordi Nadal. La dimensión de las nuevas instalaciones, más la legislación vigente al haberse suspendido los Estatutos de Autonomía, no permitían limitar el número de matriculaciones, por lo que éste aumentó considerablemente. Se incrementó notablemente el profesorado, sin que la propia universidad pudiera intervenir en su selección, con lo que aparecieron casos de catedráticos que cabría calificar de transeúntes, puesto que su deseo era conseguir un destino diferente, normalmente Madrid, y no se sentían identificados con el espíritu que había presidido la creación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su principal inquietud era que se convocara cuanto antes el concurso que les había de abrir la puerta de Madrid.